

Países de América Central retroceden en la prohibición de la minería metálica

Por: Edgardo Ayala. 27/01/2025

SAN SALVADOR – La minería metálica tiene un renovado impulso en América Central, fomentado por algunos gobernantes populistas que, para suavizar los daños ambientales, alegan que la pueden desarrollar en armonía con la naturaleza, algo difícil de creer.

Pero con ese discurso pretenden obtener la aprobación de una mayoría que parece seguirles ciegamente, no así ambientalistas ni otros sectores sociales, dijeron activistas a IPS.

“La mera popularidad del presidente Bukele no basta, no es respaldo, para decir que la mina no va a contaminar en el país”, explicó a IPS el activista Rodolfo Calles, de la [Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños](#), en torno al interés mostrado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de reactivar la minería metálica, prohibida desde hace siete años.

América Central, un istmo de seis naciones y 64 millones de habitantes, es una de las regiones más vulnerables ambientalmente, donde activistas y defensores sociales advierten desde hace décadas de los impactos negativos que la industria extractivista metálica produce en los ecosistemas de esos países.

Producto de esas luchas, en marzo de 2017 se aprobó en El Salvador una ley que prohibió la minería metálica en todas sus formas, en la primera medida de su tipo en el mundo y por la cual fue considerada un hito histórico.

Costa Rica había hecho lo propio en 2010, pero solo para la minería a cielo abierto, y otras naciones han paralizado proyectos específicos, como sucedió en Guatemala y Honduras y, el año pasado, en Panamá.

“La mera popularidad del presidente Bukele no basta, no es respaldo, para

decir que la mina no va a contaminar en el país”: Rodolfo Calles.

América Central es una región rica en biodiversidad y recursos naturales. Tiene abundante agua y bosques y también recursos minerales. A excepción de Belice, el único país sin depósitos destacados de minerales, pueden encontrarse en todos los territorios cantidades significativas de metales como oro, plata o zinc, además de níquel, cobre y otros minerales.

Pero variados estudios señalan que el aporte económico de la industria minera [es mínimo en el área](#), y en el caso de El Salvador, Guatemala y Honduras, no ha sobrepasado 1 % de su producto interno bruto (PIB). El PIB por habitante en la región ronda los 6000 dólares.

Guatemala [se erige como el país centroamericano con una mayor riqueza mineral](#), metálica o no, mientras que Panamá y El Salvador disponen de unas concentraciones mucho más discretas de elementos minerales de interés, según un estudio.



Panamá fue escenario de un estallido social contra la explotación de la mayor mina de cobre en América Central, en las protestas más grandes en

el país en tres décadas y que pasaron a demandar el cese de toda la actividad extractiva. Como resultado, en noviembre de 2023, una ley estableció una moratoria indefinida de la minería. Imagen: Luis Mendoza / Mongabay

En retroceso

Ahora El Salvador y Costa Rica, gobernados por mandatarios etiquetados de populistas, van dando pasos hacia atrás.

“Bukele lanza el tema porque se respalda en la credibilidad que dice tener como presidente y en la desinformación que la gente tiene sobre este tema”, recalcó Calles.

Pese a su carácter autoritario, el presidente sigue gozando de un amplio apoyo popular, según todos los sondeos de opinión.

Por su parte, el mandatario costarricense, Rodrigo Chaves, informó el 27 de noviembre que ha presentado a la unicameral la Asamblea Nacional un proyecto de ley para revertir la prohibición de las minas de cielo abierto, lo que ha disparado todas las alarmas en un país reconocido por sus esfuerzos en preservar el medioambiente.

La intención es dar luz verde, finalmente, a un yacimiento de oro que ya tenía ganada la concesión, pero fue cancelado al entrar en vigencia la prohibición de 2010, amparada en la premisa constitucional de que los ciudadanos tienen derecho vivir a un medio ambiente sano.

La mina se localiza en la localidad de Crucitas, en la provincia de Alajuela, en el norte del país. Es propiedad del consorcio canadiense Infinito Gold.

Pero el presidente Chaves quiere revertir la prohibición.

“Ahora justo estamos viendo cómo vamos a hacer para contrarrestar lo que se nos viene encima”, señaló a IPS la ambientalista costarricense Erlinda Quesada, del [Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción de Piña](#), una organización que, entre otras cosas, busca proteger las fuentes de agua ante la producción intensiva de monocultivos.

En conversación telefónica, desde el pueblo de Guácimo, en la provincia de Limón, en el noroeste del país, Quesada agregó: “Para nadie es un secreto que tenemos un gobierno populista que, con la propuesta, lo que hace es congraciarse con esos sectores, sencillos, los más pobres del país, y tenerlos en sus manos” a la hora de querer aprobar la propuesta.

En tanto, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, intensifica su relación con China al otorgar, también el 27 de noviembre, la quinta concesión a la minera [Xinjiang Xinxin Mining Industry](#).

El nuevo proyecto extractivo, de 1500 hectáreas, se localiza entre los municipios de Santo Domingo y La Libertad, en el centro de Nicaragua. En total, las operaciones del consorcio alcanzan una extensión de 43 000 hectáreas.

Esas concesiones dadas por el régimen dictatorial de Ortega parecerían, además del beneficio económico, una jugada para acercarse cada vez más a la potencia asiática e importunar a los Estados Unidos, que busca frenar a la potencia asiática en el escenario geopolítico mundial.



En septiembre de 2022, la población de Asunción Mita, en el este de Guatemala, votó en contra del proyecto minero Cerro Blanco, propiedad de Elevar Resources, una subsidiaria de la canadiense Bluestone Resources. En esa consulta ciudadana ganó el «no». Imagen: Edgardo Ayala / IPS

La esperanza económica de Bukele

De la nada, sin venir al cuento, Bukele publicó el mismo 27 de noviembre un mensaje en la red social X en el que dejó entrever su interés por que el país regrese a la industria extractiva, despertando preocupación entre sectores sociales que, tras una larga lucha, habían logrado que la Asamblea Legislativa prohibiese la minería, aquel marzo de 2017.

“Somos el único país en el mundo con una prohibición total de la minería metálica, algo que ningún otro país aplica. ¡[Absurdo!](#)”, escribió el presidente.

Agregó que esa riqueza puede ser aprovechada de manera responsable para llevar un desarrollo económico y social “sin precedentes” al pueblo salvadoreño.

Ese desarrollo es el que ha prometido materializar en su segundo quinquenio

presidencial, iniciado en junio de 2024, tras ganar las elecciones en febrero en medio de ácidas críticas de que la Constitución no le permitía participar en una segunda elección, consecutiva.

Luego, el 1 de diciembre, en un acto público, el mandatario intentó justificar su proyecto extractivista, al señalar que el potencial minero del país alcanza para una riqueza acumulada de tres billones (millones de millones) de dólares, equivalentes a 8800 % del actual PIB salvadoreño.

Solo en oro, detalló, hay en el subsuelo alrededor de 50 millones de onzas de oro, que equivaldrían a unos 132 000 millones de dólares, al valor actual. Pero no solo se trata de oro y plata, dijo.

“Según nuestros estudios iniciales, hemos encontrado metales de la cuarta revolución industrial, como litio, cobalto y níquel, que sirven para hacer las baterías para vehículos eléctricos y almacenamiento de energía renovable”, afirmó.

También se ha detectado, añadió, vetas de tierras raras, utilizadas para la electrónica avanzada, turbinas eólicas y motores de los vehículos eléctricos, así como platino, paladio e iridio para producir hidrógeno y convertidores catalíticos, entre otros.

Bukele afirmó que impactos ambientales siempre habrá en cualquier proyecto de desarrollo, pero se pueden minimizar. Como su partido Nuevas Ideas controla la Asamblea Legislativa, le resultaría muy fácil dar el paso para revivir la minería en El Salvador.



Una pancarta contra la minería en una iglesia en El Salvador. La movilización social en contra de proyectos mineros ha sido clave para intentar detener las operaciones de esos consorcios y evitar, así, la contaminación del suelo y el agua en las comunidades. Imagen: Edgardo Ayala / IPS

Cuentas alegres

“El presidente está haciendo cuentas alegres de los supuestos beneficios económicos que se obtendrían, pero no hace cuentas de los daños reales que habría en los ecosistemas”, sostuvo el salvadoreño Calles, que ha estado en lucha contra las minas desde hace varios años.

Agregó que cuando se discutía la prohibición de la minería en el país, Bukele ya estaba metido en la política, y ya sabía que había estudios que demostraban que esa industria era inviable en El Salvador por sus impactos negativos en el agua, el suelo y en la salud de las personas.

“No sé de dónde saca que los impactos serán menores, pues lo que sabemos es que las técnicas de extracción de la minería no han cambiado significativamente, y

se sigue usando, por ejemplo, el cianuro”, recalcó. Ese es un compuesto químico que, mal usado o filtrado involuntariamente a cuerpos de agua, puede resultar letal.

La experiencia de América Central con la industria extractiva es negativa y de larga data, al igual que en otras regiones del mundo.

En un foro organizado en 2009 San José de Costa Rica por el [Tribunal Latinoamericano del Agua](#), se analizaron las experiencias regionales de la minería a cielo abierto que para entonces había en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Perú, y se escucharon testimonios sobre los efectos adversos en estos países.

Entre esos testimonios estuvieron los de los representantes de la Asociación Hondureña de Organizaciones no Gubernamentales y del Comité Ambiental del Valle de Siria, donde operaba para entonces el proyecto minero San Martín, a cargo de Minerales Entre Mares de Honduras. Fue clausurada en 2008.

En 2022, la organización internacional Oxfam aseguró que el yacimiento dejó tras de sí “una estela de denuncias sobre afección a la salud humana (...), así como señalamientos de contaminación y destrucción de flora, fauna y ecosistemas locales; daño económico, social, y cultural a las comunidades”.

Mientras, a finales de 2023 en Panamá determinó el cierre de la mina de cobre más gran de Centroamérica, operada por Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals. Sucedió después que la justicia fallara que el contrato de concesión era inconstitucional.

La clausura fue resultado de multitudinarias protestas sociales, ante las denuncias de grave contaminación ambiental y llevó al gobierno a impulsar una ley que determinó una moratoria de la actividad minera en el país por tiempo indeterminado.

También le pueden interesar:

[Minería del cobre en Colombia: entre la soberanía y el sueño de una industria propia](#)

[Argentina reinicia la minería del cobre en medio de tensiones ambientales](#)

En Guatemala, fue gracias a la movilización social que también se ha logrado parar los principales proyectos mineros en esa nación, a partir de resoluciones judiciales.

“Los proyectos más emblemáticos están suspendidos, por la Corte Constitucional, cuyos miembros, aunque corruptos, aceptaron que las empresas nunca cumplieron con dos requisitos fundamentales: la de proveer de información a la comunidad y la de realizar consultas ciudadanas”, explicó a IPS Julio González, del [Colectivo Madreselva](#), desde Ciudad de Guatemala.

González añadió que entre esos se encuentra la mina de níquel propiedad del Grupo Solway Investment, asentada en el municipio de El Estor, y la de El Escobal, de la canadiense Pan American Silver, en las cercanías de San Rafael Las Flores, ambas en el este del país.

También se suma la mina Progreso VII Derivada, conocida como La Puya, propiedad de Exploraciones Mineras de Guatemala, en el departamento de Guatemala, en el centro-sur del país, así como la de Cerro Blanco, de la canadiense Bluestone Resources, yacimiento localizado en las inmediaciones de Asunción Mita, en el departamento de Jutiapa, en el este, muy cerca de la frontera con El Salvador.

González cuestionó la autenticidad de los estudios de impacto ambiental realizados por los consorcios mineros, pues se basan en un área geográfica específica, muy restringida.

“La mentira más grande son esos estudios de impacto ambiental, realizados en las llamadas áreas de influencia, que es el lugar donde está la mina y las tres o cuatro aldeas que están alrededor, pero el agua, que se va a contaminar, va mucho más allá de esa área de influencia”, subrayó.

Sobre la marcha atrás que está mostrando El Salvador, con la posible reactivación de la minería, acoto: “Yo lo que veo es el alineamiento de Bukele con la economía hegemónica, que no la ejerce el gobierno de Estados Unidos sino las corporaciones estadounidenses”.

ED: EG

[LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ](#)

Fotografía: Ipsnoticias. Representantes de una decena de organizaciones ambientalistas, aglutinadas en la Mesa frente a la Minería Metálica en El Salvador, se pronuncian contra las intenciones del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de querer reabrir esa industria en el país, proscrita por ley desde 2017. Imagen: Mesa frente a la Minería Metálica en El Salvador

Fecha de creación

2025/01/27